



Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 545.

Han llamado vivamente la atención de este Gobierno de provincia las repetidas quejas presentadas en el mismo de varios interesados á quienes, bajo pretexto mas ó menos plausible de la apertura ó ensanche de caminos vecinales, se les ha expropiado por los respectivos Alcaldes de líneas rústicas de que eran poseedores, sin mediar para ello la declaración de utilidad pública de las obras, las formalidades y expediente consiguientes, y principalmente la indemnización previa que determinan las leyes. Tan gravísimos abusos, atentatorios al derecho sagrado de propiedad, uno de los fundamentos en que descansa toda sociedad bien organizada, no pueden pasar desapercibidos á este Gobierno ni escusarse de manera alguna; porque ni aun el celo por el servicio público puede libertar á los Alcaldes de la responsabilidad en que incurren, supuesto que pueden ejercer su influjo dentro de la órbita legal sin herir respetabilísimos inte-

reses cuya custodia les está encomendada en primer término en sus respectivas jurisdicciones. Por tanto, he resuelto dirigirme á los Alcaldes en esta ocasión importante, prohibiéndoles llevar á efecto expropiación de ningún género sin conocimiento de este Gobierno; en la inteligencia de que estoy resuelto á castigar severamente y entregar á los tribunales á los que no presten á la propiedad particular la protección y el respeto que las leyes le garantizan. De haberse enterado de esta circular y de haberla expuesto al público, darán los Alcaldes aviso á este Gobierno en el término de ocho días. Orense 15 de octubre de 1858. —El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

Número 546.

Por el Ministerio de la Gobernación con fecha 30 de setiembre último se me dice lo que sigue:

En la regla 7.ª de la Real orden circular de 16 de mayo próximo pasado se previno que los Ayuntamientos hiciesen constar en los expedientes de declaración de soldados para el reemplazo del año actual la talla de cada mozo, sin omitir la de aquellos que fuesen excluidos del servicio por no llegar á la de 1 metro 596 milímetros señalada en el art. 75 de la ley de reemplazos vigente; y que los Consejos provinciales expresen esta circunstancia en los estados á que alude el artículo 155 de la misma ley; pero á fin de que estos nuevos datos vengan con la uniformidad necesaria para que pueda redactarse en este Ministerio la Estadística general de quintas, la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que ese Consejo provincial, en vista de los datos que

deben haber facilitado los Ayuntamientos á consecuencia de lo que se dispuso en la citada regla 7.ª, forme con completa separación del estado que se pidió por Real orden circular de 28 de agosto último, y V. S. remita á este Ministerio dentro del término de un mes otro estado que exprese con sujeción al modelo adjunto, el número de mozos que en esa provincia han sido tallados para el último reemplazo del ejército, el de los que no han tenido

la talla exigida por la ley, y el de los que la han alcanzado, ó excedido de ella, clasificando á todos en la forma por el orden que el mismo modelo indica.

De orden de S. M. lo digo á V. S. para su inteligencia, la del Consejo provincial y demás efectos consiguientes.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para su debida publicidad. Orense 18 de octubre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

QUINTA DE 1858

PARA EL EJÉRCITO ACTIVO.

ESTADO que expresa las tallas de los mozos que han sido medidos en esta provincia al verificarse la quinta del año actual para el reemplazo del Ejército activo.

Número de mozos cuya talla no llegó á 1 metro 50.	»
Idem de los que tuvieron la de 1 metro 50, ó que excediendo de ella no llegaron á 1 metro 55.	»
Idem de los que tuvieron la talla de 1 metro 55, ó excediendo de ella no llegaron á la de 1 metro 56.	»
Idem de los que tuvieron la de 1 metro 56 ó pasaron de ella sin llegar á la de 1 metro 596 que exige el artículo 75 de la ley.	»

Número de mozos que tuvieron la talla de un metro 596 ó excediendo de ella no llegaron á la de 1 metro 63.	»
Idem de los que tuvieron la talla de 1 metro 63, ó excediendo de ella no llegaron á la de 1 metro 66.	»
Idem de los que tuvieron la de 1 metro 66, ó excediendo de ella no llegaron á la de 1 metro 69.	»
Idem de los que tuvieron la de 1 metro 69, ó excediendo de ella no llegaron á la de 1 metro 72.	»
Idem de los que tuvieron la de 1 metro 72, ó excediendo de ella no llegaron á la de 1 metro 75.	»
Idem de los que tuvieron la de 1 metro 75, ó excedieron de ella.	»

RESÚMEN.

Número de mozos faltos de la talla de 1 metro 596 exigida por la ley.	»
Idem de los que tuvieron la talla de 1 metro 596 ó excedieron de ella.	»

Número total de mozos medidos en esta provincia en la quinta del año actual para el Ejército activo.

(Fecha y firma.)

(A continuación se pondrán las Observaciones.)



El Ministerio de la Gobernación, con fecha 24 de setiembre último se me dice lo siguiente:

La Reina (q. D. g.) se ha servido resolver, oído el Consejo de Estado y como aclaración al art. 44 del Reglamento de 4 de octubre de 1855 acerca del modo de proceder los Comisarios provinciales.

Quedan los pleitos que versen sobre asuntos en que esté inmedia y directamente interesada la administración central, los Gobernadores encarguen su defensa a los fiscales de Hacienda, y donde no los hubiere, a los Promotores fiscales de los Juzgados.

2.º Que cuando únicamente estén interesadas corporaciones administrativas provinciales o municipales, se nombren los defensores en sus litigios administrativos por los Gobernadores en el primer caso y por los Ayuntamientos debidamente autorizados en el segundo, abonándose los honorarios de los fondos pertenecientes a la respectiva corporación, o, obrando en el caso de Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para su debida publicidad. Orense 18 de octubre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guítan.

Número 548.

En la Gaceta de Madrid número 273 del jueves 30 de setiembre último se lee lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, a 28 de setiembre de 1858, en los autos de competencia entre el Juzgado de primera instancia de San Fernando y el de la Capitanía general del Departamento de Cádiz, sobre el conocimiento de la causa formada contra José Antonio Archidona por quebrantamiento de condena:

Resultando que José Antonio Archidona se hallaba en el presidio de las Cuatro Torres del arsenal de la Carraca cumpliendo la que en 1845 se le había impuesto por la Audiencia de Alhacete, y que estando trabajando con otros de su clase el 9 de noviembre de 1857 en el sitio titulado la Cañera de la población, verificó la fuga quebrantando de este modo su condena:

Que a poco tiempo de andar vagando por aquel territorio fue aprehendido cerca de Híjate, y procesado en causa por sospechas de robo, instruida en el Juzgado de primera instancia de Valdepeñas, en la que no resultando que hubiese delinquido después de la deserción, se dictó auto de sobreseimiento, que fue aprobado por la Audiencia de Alhacete, disponiendo que el reo fuese remitido con el tanto de culpa respectivo al quebrantamiento de condena al 1.º de junio de 1858, para que compareciese:

Resultando que, noticioso el Jefe de San Fernando de que el reo y testamento habían sido remitidos al Comandante de Marina del Arsenal de la Carraca, y de que por la jurisdicción de este ramo se seguía causa por la fuga de Archidona, reportó al Capitán general de la Carraca, para que se le comunicara a la

que se usó el Juzgado de Marina, en conformidad a la presente competencia:

Resultando que en el expediente 123 de 1858 civil ordinario que Archidona no es alforado de Marina, y que se trata de un delito común de quebrantamiento de condena impuesto por la jurisdicción ordinaria, cometida no en arsenal o buque de guerra, sino en la cañera de la Carraca, hallaba trabajando el que deserte:

Resultando que el Juzgado de Marina se funda en que el presidio de las Cuatro Torres de la Carraca está sometido a la autoridad de Marina, sin que en lo concerniente a lo económico y disciplinario intervienga para nada la dirección ni Jefe de los demás presidios; en que ha sido práctica constante que las causas por quebrantamiento de condena se hayan seguido por su jurisdicción, en una decisión de este Supremo Tribunal en un caso análogo, y en que el delito se cometió en las cañeras que la misma tiene en terrenos de su propiedad, donde Archidona estaba con la correspondiente escolta y otros de su clase para extraer la piedra que se empleaba en las obras hidráulicas del mencionado punto militar:

Vistos; siendo ponente el Ministro don Felipe de Urbina.

Considerando que lo establecido en el Código penal, tanto respecto a las penas como a la suplicación sobre el delito de que se trata, determina que únicamente corresponde conocer de él a los Tribunales ordinarios:

Considerando que este concepto se halla confirmado por la Real orden de 11 de marzo de 1851, en la que se declara que el Código penal confiere a los Tribunales de Justicia la facultad de conocer y aplicar las penas que señala por el delito de deserción o fuga de los confinados; y que queda derogada la Ordenanza de Presidios en lo concusente a dicho delito:

Y considerando que por esta declaración no puede dudarse que la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer en esta causa.

Declaramos, que el conocimiento de ella corresponde al referido Juzgado de San Fernando, al que se remita, y a las otras actuaciones, para lo que proceda con arreglo a derecho.

Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corte y en la Colección legislativa, pasando al efecto las correspondientes copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramón María de Arriola.—Joaquín de Roncali.—Juan María Biec.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elío.—José María de Trillo.

Publicación.—Leída y publicada fue la precedente sentencia por el Ilmo. Señor D. Felipe de Urbina, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando haciendo audiencia pública en su Sala segunda el día de hoy, de que certificó como Secretario, de S. M. y Escribano de Cámara.

Madrid 28 de setiembre de 1858.—Dionisio Antonio de Puga.

En la villa y corte de Madrid, a 23 de setiembre de 1858, en los autos pendientes ante V. S. a virtud de apelación interpuesta por Julian Romero de la providencia que dictó la Sala tercera de la Real Audiencia de Valladolid, denegatoria de la administración del recurso de casación, deducido por el mismo en el pleito que sigue con Juan García, vecino de Segallos, sobre interdicto: si reo el Jefe de San Fernando de que en 20 de mayo de 1856 Juan García, vecino de Segallos, propuso contra Martina Boyano, mujer de Julian Romero, un interdicto para recuperar la posesión de que aquella se había despojado, abriendo el entre de un

partido que el querrelante tenía en su heredad para su uso exclusivo, y que por el la Martina, con su carro y bue

yes:

Resultando que admitida y dada por García la información correspondiente, sin audiencia ni citación de la parte demandada, por haber ofrecido y prestado la fianza prevenida por la ley; y antes de que se diese sentencia, presentó escrito Julian Romero, marido de la Martina Boyano, deduciendo contra Juan García otro interdicto de retener la posesión en que estaba y de que le había despojado, cercando una heredad y cerrándole la entrada por la que siempre había pasado para su finca colindante, sobre lo cual ofreció la correspondiente información:

Resultando que declarado sin lugar este interdicto por providencia de 4 de junio, solicitó Julian Romero la reforma de ella por contrario imperio, insistiendo en que se le admitiese aquel, ora en concepto de retener, ora en el de recuperar la posesión, y pretendiendo por un otro si que, toda vez que tenía noticia de que García había deducido otro interdicto, se acumulasen ambos, conforme al art. 175 de la ley de Enjuiciamiento civil, y si diese cuenta en un mismo acto, citándose a las partes, con arreglo al 160 y 161 de la misma ley:

Resultando que, acordada la acumulación por sentencia, que causó ejecutoria, y llamados los autos para determinar el Juez de primera instancia, sin otro trámite, pronunció sentencia restituyendo al Juan García en la posesión, y condenando a Martina Boyano y su marido Julian Romero a que en lo sucesivo no inquietasen ni perturbasen en ella, bajo apercibimiento, con reserva de su derecho para que lo ejercitasen como vieran convenientes:

Resultando que interpuesto por Julian Romero recurso de nulidad y apelación, y remitidos los autos a la audiencia, se pronunció sentencia confirmando la del inferior con las costas de ambas instancias, y advirtiendo al Juez D. Manuel Grijalva que en lo sucesivo se abstuviera de acceder a más acumulaciones que las de los pleitos y demás negocios que expresamente y terminantemente están designados en el art. 157 de la citada ley de Enjuiciamiento civil:

Resultando que contra esta sentencia interpuso Romero recurso de casación, en tiempo y forma, alegando las causas expresadas en los números 4 y 6 del artículo 1015 de dicha ley, por haberse omitido en la tramitación del juicio el requisito esencial e integrante de la información ofrecida sobre los hechos que comprendía su interdicto:

Resultando que, denegada la admisión del recurso, el propio Julian Romero interpuso apelación, que lo fue admitida para ante este Supremo Tribunal:

Vistos; siendo Ponente el Ministro don Joaquín de Roncali:

Considerando que con arreglo al artículo 1014 de la ley de Enjuiciamiento civil procede el recurso de casación en los pleitos posesorios cuando se funde en cualquiera de las causas expresadas en el art. 1015 de dicha ley, y que en el presente caso, al interponer en el presente pleito el recurso de que se trata, cumplió con todos los requisitos que previene la citada ley en sus artículos 1015, 1019 y 1025 para que pueda tener lugar su admisión:

Considerando que, al determinar acerca de la admisión o inadmisión de los recursos de casación, deben limitarse las Audiencias a examinar si concurren las circunstancias expresadas respectivamente en el art. 1025, y que toda otra cuestión es de la exclusiva competencia de este Supremo Tribunal, que por lo tanto, la Sala tercera de la Audiencia de Valladolid carecía de facultades para apreciar, como lo ha hecho, la procedencia o improcedencia del trámite, cuya omisión ha sido el fundamento del recurso interpuesto por Julian Romero:

Considerando, finalmente, que las cau-

sas alegadas por el mismo con las que designa el art. 1015 de la referida ley de Enjuiciamiento civil, bajo los números 4 y 6, acerca de las cuales corresponde decidir en su día a este Supremo Tribunal:

Callamos, que debemos de revocar y revocamos el auto apelado que dictó la Sala tercera de la Audiencia de Valladolid en 11 de setiembre del año último, y declaramos haber habido lugar a la admisión del recurso de casación interpuesto por Julian Romero contra la sentencia pronunciada por la misma Sala en 25 de agosto anterior; y en su virtud, mandamos que se proceda a la sustanciación del expresado recurso, según lo dispuesto en el art. 1033 de la ley de Enjuiciamiento civil; prestándose previamente por Julian Romero la caución prevenida en los artículos 1028 y 1032, y citándose y emplazándose de nuevo a las partes para ante este Supremo Tribunal, todo dentro del término marcado en la misma ley, a cuyo fin se libre el correspondiente despacho a la Audiencia de Valladolid.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Gobierno e insertará en la Colección legislativa, para lo cual se pasen las oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramón María de Arriola.—Joaquín de Roncali.—Juan María Biec.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elío.—José María de Trillo.

Publicación.—Leída y publicada fue la precedente sentencia por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Joaquín de Roncali, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose haciendo audiencia pública en su Sala segunda el día de hoy, de que certificó como Secretario de S. M. y Escribano de Cámara.

Madrid 28 de setiembre de 1858.—Dionisio Antonio de Puga.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 18 de octubre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guítan.

Número 549.

En la Gaceta núm. 278 del martes 5 del actual se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administración.—Negociado 6.º

Remitido a informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente sobre autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Puebla de Alcocer, para procesar a D. Francisco Toribio Casas, Teniente de Alcalde de Esparragosa de Leres, por supuestas injurias y calumnias contra Dionisio García, han consultado lo siguiente:

Estas Secciones han examinado el expediente sobre autorización solicitada por el Juez de primera instancia de Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz, para procesar a D. Francisco Toribio de las Casas, Teniente de Alcalde de Esparragosa de Leres, por suponer que ha injuriado y calumniado a Dionisio García al dictar en auto en que declaraba a este inhabilitado para ser guarda de campo.

De este expediente resulta:

Que D. José Fernández Romero, Administrador de la dehesa llamada de la Adella, Arzobispado de Esparragosa de Leres, presentó escrito a D. Francisco Toribio de las Casas, estando este funcionando de Alcalde y en el propuesto para guarda de aquella dehesa, a Dionisio García, solicitando que se le juramentara y se le expidiera el título correspondiente, conforme al Reglamento de 8 de noviembre de 1849.

Que D. José Fernández Romero, Administrador de la dehesa llamada de la Adella, Arzobispado de Esparragosa de Leres, presentó escrito a D. Francisco Toribio de las Casas, estando este funcionando de Alcalde y en el propuesto para guarda de aquella dehesa, a Dionisio García, solicitando que se le juramentara y se le expidiera el título correspondiente, conforme al Reglamento de 8 de noviembre de 1849.

Que D. José Fernández Romero, Administrador de la dehesa llamada de la Adella, Arzobispado de Esparragosa de Leres, presentó escrito a D. Francisco Toribio de las Casas, estando este funcionando de Alcalde y en el propuesto para guarda de aquella dehesa, a Dionisio García, solicitando que se le juramentara y se le expidiera el título correspondiente, conforme al Reglamento de 8 de noviembre de 1849.

El Alcalde á continuación dictó un auto que á la letra dice así: «No concurren en Dionisio García las circunstancias comprendidas en los números 5, 6, 7, 8 y 9 del reglamento de 8 de noviembre de 1819, no procede el juramentarlo, y por lo tanto hágase saber al solicitante proponga otro en quien concurren aquellas circunstancias.»

Creyéndose Dionisio García injuriado y calumniado en el auto anterior, por cuanto en él, además de asegurar falsamente que no sabía leer ni escribir, se afirmaba indirectamente que no era de buenas costumbres, que no gozaba de buena opinión, que había sufrido penas aflictivas y que había sido expulsado de la plaza de guarda, llamó á juicio de conciliación al Alcalde, quien se limitó á decir que el dicho auto, obró como Autoridad gubernativa, cuyos actos no son justiciables, sin perjuicio de la licencia del Gobernador de la provincia, ante quien daría las debidas explicaciones.

En este estado, Dionisio García formuló demanda de injuria y calumnia contra Don Francisco Toribio de las Casas, y reconocida por este la autenticidad, anteriormente reproducida, pidió que se solicitara la autorización correspondiente para continuar el procedimiento. Comulgadas las diligencias al Promotor fiscal, opinó este que no era procedente la acción de injuria y calumnia, ni la autorización que se pedía, y que en todo caso, procedería reclamar por injusticia notoria, conforme á lo dispuesto en el art. 270 del Código penal. No conformándose el Juzgado con el Ministerio público, solicitó dicha autorización, que le fue denegada fundándose para ello el Gobernador civil en las razones expuestas por el Consejo provincial, y este en que D. Francisco Toribio de las Casas, al desechar á Dionisio García, tenía necesidad de consignar los motivos que le aconsejaban aquella conducta; que en el auto denunciado no hay frase ni concepto, especial que produzca injuria ni calumnia; que la negación que en ella se establece no aparece del todo caprichosa, según datos y justificaciones que resultan de antecedentes; y por último, que la existencia ó no existencia de dichas cualidades son hechos de prudente apreciación que la Autoridad responsable de sus actos debe tener derecho para calificar con libertad de conciencia.

Los datos y justificaciones á que se refiere el Consejo provincial y que no acompañan á las diligencias judiciales, son, según el mismo, una justificación hecha y admitida por aquel Gobernador civil sobre la embriaguez y costumbres disipadas de Dionisio García, en la cual, se dice, declaran cuatro testigos que éste frecuenta las tabernas y se embriaga constantemente promoviendo disputas y cuestiones; un informe del Ayuntamiento en que se dice que Dionisio García no es de buena conducta, y que se le ha visto beber en algunas ocasiones; y por último, una exposición firmada por varios vecinos de Esparragosa, en la cual se dice que Dionisio García es de buena conducta, honrado y probo. Es de advertir, finalmente, que el querellante ha firmado por sí mismo el acta del juicio de conciliación.

En atención á lo expuesto:

Visto el art. 7.º del Real decreto de 27 de marzo de 1853:

Considerando que es ilegal é inatendible la justificación hecha por el Alcalde de Esparragosa, no debiendo tomarse en consideración nada de cuanto por medio de ella se ha pretendido justificar, lo mismo que la oposición hecha en favor del querellante, el cual solo judicialmente hubiera podido probar la injuria y calumnia que se le atribuyó;

Considerando que hecha abstracción de los hechos ilegales con que lo mismo el querellante que el querellado trataron de sujar al sumario judicial, no resulta de estas diligencias más que una providencia gubernativa, contraria á exactitud ó ver-

acidad, no se ha probado absolutamente nada oportunamente;

Considerando que no justificándose nada en contrario, las providencias de una Autoridad cualquiera tienen á su favor la presunción de haber sido rectamente dictadas,

Las Secciones opinan puede V. E. consultar á S. M. que se debe confirmar la negativa del Gobernador civil.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de setiembre de 1858.—Posada Herrera. Sr. Gobernador de la provincia de Badajoz.

Remitido á informe de las Secciones de

Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente sobre autorización negada por V. S. al Juez de Hacienda de esa provincia para procesar á D. Federico Fernandez Garcia, Administrador de Rentas estancadas de Cervera de Rio Pisuerga, por extravió de una cantidad de tabaco, han consultado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente sobre autorización solicitada por el Juez de Hacienda de Palencia para procesar á D. Federico Fernandez Garcia, Administrador subalterno de Rentas estancadas de Cervera de Rio Pisuerga, por extravió de una cantidad de tabaco.

De este expediente resulta: que el día 19 de marzo de 1857 los guardias civiles Juan Jacobina y Lorenzo Casado Garcia aprehendieron cerca del monte de Zulima una cantidad de tabaco, que inventariada ante el Alcalde de dicho pueblo, resultó contener 83 paquetes de tabaco picado y 27 de cigarros, de los cuales cada paquete contenia dos macillos, todo lo que fué entregado al Administrador de Estancadas de Cervera D. Felipe Rodriguez Calderon, el cual dió el correspondiente recibo, especificando en el la misma cantidad de tabaco anteriormente expresada.

Habiéndose encargado posteriormente de dicha Administración de Estancadas D. Federico Fernandez Garcia, se le presentaron los mismos guardias civiles por orden de su jefe á recoger el tabaco aprehendido, y solo pudieron recoger 18 paquetes de cigarros y 40 de tabaco picado, por ser lo único que según dicho Administrador había dejado el que le precedió en este cargo.

Habiéndose instruido sumario por el Juzgado de Hacienda en averiguación de la persona que había sustraído la cantidad de tabaco que faltaba, no se encontró en la Administración principal de Hacienda de aquella provincia dato alguno del que resultara que á D. Federico Fernandez Garcia se le había hecho por su antecesor en la Administración de Cervera entrega formal de todo el tabaco aprehendido; y llamado á declarar D. Felipe Gutierrez Calderon, encargado anteriormente de la Administración de Rentas estancadas de Cervera, manifestó que había recibido de los guardias civiles, y había entregado á su sucesor, todo el tabaco que especificó en el recibo extendido al encargarse de él; que al reemplazarle D. Federico Fernandez Garcia le hizo entrega de todo, y particularmente del tabaco; y que si bien no conservaba recibo, podian deponer en confirmación de este hecho varios testigos personales que citó por sus nombres, añadiendo que para cerciorarse que había hecho entrega del tabaco aprehendido no había más que observar que todos los paquetes, que se conservaban no eran bastantes para llenar el cajón, siendo así que tales para llenar el cajón estaba el cajón lleno y aun sobraban algunos paquetes.

Examinadas las citas hechas por el Administrador Calderon, declararon el Alcalde de Cervera y D. Zacarías Herrera, que era cierto lo dicho por el Administrador,

si bien no especifican el número de paquetes que se entregaron á D. Federico Fernandez Garcia.

Don Cirilo Infante, Oficial de la Administración de Hacienda pública de aquella provincia y encargado para p. esencial la entrega de las existencias que se conservaban en la Administración de Cervera por haber salido alcanzado el Administrador Calderon, dijo: que efectivamente D. Felipe Gutierrez Calderon le hizo entrega de los 80 paquetes de tabaco picado y 27 de cigarros de contrabando; pero que en realidad no se había encargado de ellos, porque habiéndose presentado á encargarse de la Administración D. Federico Fernandez y Garcia, se entregó este de dichos paquetes; y aun cuando Calderon le pidió varias veces recibir, siempre le contestó su sucesor que ya se lo daría; por último, que tanto Calderon como Garcia vivian en una misma casa y obraban las llaves de esta en poder del primero, hasta que el declarante se volvió á la capital.

Remigio Alvarez Quiñones y Raman Roja, carabineros, niegan que ellos hubieran presenciado la entrega del tabaco, según depuso el Administrador Calderon, y lo niegan asimismo otros tres testigos citados.

El Subteniente de la Guardia civil Don Juan Masera declaró que había oido decir á Infante, el Oficial de la Administración, que el tabaco especificado en los inventarios era el mismo que se había entregado á D. Federico Fernandez Garcia, según una apuntación que conservaba en su poder; y que no le fué posible encontrar, por último, á las diferentes reclamaciones que se le hicieron, D. Federico Fernandez Garcia solo contestó que la cantidad de tabaco recogido de su Administración por los guardias civiles era la única que su antecesor le había entregado.

En este estado, el Juez de Hacienda pidió para procesar á D. Federico Fernandez Garcia la autorización correspondiente, que le fué denegada.

En atención á lo expuesto:

Considerando que mientras el Administrador Calderon no pruebe que ha entregado á su sucesor los 83 paquetes de tabaco picado y 27 de contrabando, solo él es responsable de la parte extraviada:

Considerando que ninguno de los testigos examinados depone acerca del número de paquetes entregados á D. Federico Fernandez Garcia, y que no existe recibo ni documento alguno por el que conste la cantidad de que este se ha hecho cargo,

Las Secciones opinan puede V. E. consultar á S. M. que se debe confirmar la negativa del Gobernador de Palencia.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de setiembre de 1858.—Posada Herrera. Sr. Gobernador de la provincia de Palencia.

Remitido á las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente sobre autorización para procesar á D. Felipe Prieto, Alcalde de Vivero, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente sobre autorización negada por el Gobernador de Lugo al Juez de primera instancia de Vivero para procesar al Alcalde de aquel pueblo D. Felipe Prieto, á consecuencia de denuncia que propuso contra este D. Antonio Miranda y Luaces en queja de haber ordenado la detención en la cárcel de su hijo D. Fructuoso, por el hecho de haber arrojado una piedra dentro de una casa.

De este expediente resulta:

Que en 12 de marzo de 1853 D. Antonio Miranda y Luaces, vecino de Vivero, acudió ante el Juzgado de aquel distrito en queja contra el Alcalde del mismo pueblo D. Felipe Prieto, manifestando:

Que á las nueve de la noche del 23 anterior su hijo D. Fructuoso había arrojado una piedrecita dentro de la casa de D. Juan Miranda, rompiendo una de las cristales de la claraboya que da luz á la escalera:

Que enterado el Alcalde de lo ocurrido, acordó el arresto de su hijo en la cárcel pública, y que este fué conducido á ella entre guardias municipales.

Que dicho Alcalde, á pretexto de amedrentar al niño, no consintió en ponerle en libertad, á pesar de haberse presentado dos días de este á pedirselo, ofreciendo reparar el daño causado; y por último, que el Alcalde dió nueva orden para que el niño fuera puesto en libertad, cuya orden se cumplió antes de que este llegara á la cárcel, pero después de haber causado con su primer mandato y con la conducción del niño entre guardias municipales, una alarma y un disgusto de mucha trascendencia á toda la familia.

Funda el querellante su denuncia en que, según el caso 20 del art. 495 del Código penal, incurre en una multa de medio duro á cuatro el que tira piedras ú otros objetos arrojadizos en parajes públicos ó á las casas, y en que, estando este delito castigado con la simple pena de multa, la detención de su hijo D. Fructuoso había sido efectuada ilegalmente y contra lo dispuesto por el art. 295 del Código penal.

Los testigos examinados manifestaron sustancialmente lo mismo que alegó el querellante, y en sus exculpaciones lo confirmó también el Alcalde, protestando que no había sido su ánimo el de encarcelar al niño, y si únicamente el amedrentarle; en atención á lo que, y considerando como puramente gubernativa esta resolución, el Gobernador civil denegó la autorización solicitada.

En atención á lo expuesto:

Vistos los artículos 295 y 495 anteriormente citados:

Visto el Real decreto de 13 de mayo de 1853, que faculta á las Autoridades administrativas para corregir gubernativamente las faltas:

Considerando que el Alcalde D. Felipe Prieto, si tuvo realmente propósito de reducir á prisión y encarcelar al niño Don Fructuoso Luaces, desistió espontáneamente antes de haberlo realizado:

Considerando que en el momento mismo de mandar á la cárcel al niño D. Fructuoso, manifestó á los Municipales y demás circunstantes que no era su ánimo el que se llevara á efecto la orden:

Considerando que cualquiera que sea la torpeza por que pueda censurarse esta conducta, no se echa de ver en ella el menos ánimo de delinquir,

Las Secciones opinan puede V. E. consultar á S. M. que se debe confirmar la negativa del Gobernador civil.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de setiembre de 1858.—Posada Herrera. Sr. Gobernador de la provincia de Lugo.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 18 de octubre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

Ayuntamiento de San Ciprián de Vinas.

Para proceder á la rectificación del padrón de riqueza en este distrito con el acierto posible y evitar los excesos é inexactitudes que se experimentan por virtud de la traslación de propiedad, se hace preciso que tanto vecinos como forasteros con utilidades en él, manifiesten por relación conforme á los artículos 21, 22 y 23 de la Instrucción de 23 de mayo de 1815, las variaciones que haya sufrido, entre-

gándolas en la Secretaría de Ayuntamiento dentro del término de diez días contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín oficial, pasado el que no serán admitidas sus reclamaciones. San Ciprian de Vinas octubre 10 de 1858.—*Vicente Arias Lemos.*—P. A. D. A., *Federico Rodriguez Maños*, Secretario.

Idem de Junquera de Ambia.

Concluida la rectificación del padron de riqueza de este distrito, base para la formación del repartimiento del año próximo de 1859, se anuncia al público para que los interesados puedan enterarse y hacer las reclamaciones que sean justas ante esta corporación, en cuya Secretaría estará de manifiesto por el término de ocho días contados desde la inserción de este anuncio en el Boletín oficial. Junquera de Ambia octubre 12 de 1858.—El Alcalde Presidente, *José Quintas*.

Idem de Gomezende.

El mismo de conformidad con la Junta repartidora, acordó invitar, tanto a los forasteros como a los vecinos contribuyentes al pago de la contribución de inmuebles cultivo y ganadería del año próximo venidero, para que dentro de veinte días a contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín oficial, presenten en la Secretaría municipal las relaciones juradas que determina el art. 20 del Real decreto de 23 de mayo de 1845 y aclaraciones posteriores; persuadiéndose que en otro caso caducará su acción, y el repartimiento será confeccionado con presencia de los datos que sirvieron de base para el del presente año. Gomezende octubre 11 de 1858.—E. P., *Pedro Viso y Rodriguez*.—D. O. D. C., *Carlos Silva*.

Idem de Canedo.

Deseando esta corporación y junta pericial obtener un exacto padron de riqueza inmueble, cultivo y ganadería de este municipio, acordaron que todos los contribuyentes vecinos y forasteros presenten en la Secretaría de Ayuntamiento dentro de 15 días, término improrogable desde el día de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial las relaciones juradas que previenen los artículos 20, 21, 22 y 23 del Real decreto de 23 de mayo de 1845, bajo las penas establecidas por el 24 del mismo. Canedo octubre 13 de 1858.—*Joaquín Soto.*—P. A. D. A. y J., *Gabriel Sotelo*.

Juzgado de 1.ª instancia de Orense.

El Sr. D. Facundo Santos Cid, Secretario honorario de S. M. y juez de primera instancia de Orense y su partido.—Por el presente se cita y emplaza a Carlos Ramon Rodriguez, del lugar de Milleiros, vecindado en Cabreiros en esta provincia, para que dentro de treinta días a contar desde esta fecha comparezca en esta audiencia a responder a los cargos que contra él resultan en causa que se sustancia por robo de un macho de la pertenencia de Cosme Gomez, de Rubiados, pues en otro caso dicho término pasado sin verificarlo las diligencias que ocurran se sustanciarán con los estrados del Tribunal. Dado en Orense a 11 de octubre de 1858.—*Facundo Santos Cid.*—Por mandado de S. S., *Santos de la Torre*.

Idem de Padron.

Don Felipe Vinas, caballero de la Real y distinguida orden española de Carlos III, y juez de primera instancia en la villa y

partido de Padron &c.—Por medio de este tercer y último edicto cito, llamo y emplazo a Manuel Alvarez Camareda, hijo de Andrés y de Inés, natural de Celanova, ayuntamiento y partido del mismo nombre en la provincia de Orense, soltero, de 16 años de edad, criado de servir, para que dentro de nueve días se presente en la cárcel de este juzgado y a mi disposición a responder a los cargos que contra él resultan en causa que se le sigue sobre varios hurtos; apercibido de que pasados se sustanciará en su rebeldía y le pararán perjuicio todas las actuaciones como si estuviera presente. Asimismo exorto en la forma de derecho a los Sres. Jueces de primera instancia, Gobernadores civiles, Comandantes de la Guardia civil, Alcaldes constitucionales y demas Autoridades de este territorio de Galicia a que se siryan disponer la captura del Manuel Alvarez y su conducción a este juzgado con la seguridad debida, mediante así lo tengo acordado en dicha causa y en ello se interesa la recta administración de justicia. Padron y octubre 2 de 1858.—*Felipe Vinas*.—Por mandado de S. S., *Angel Astray Fernandez*.

Idem de Vivero.

El Licenciado D. Ricardo Rodriguez Rodriguez, juez de primera instancia de la villa de Vivero.—Por el presente cito, llamo y emplazo, a José Candamil, vecino de la parroquia de S. Pedro de Minotos, para que al término de 50 días a contar desde la fecha de la inserción en el Boletín, se presente en este juzgado por la escribanía del que refrenda para citarle y emplazarle en la tercera propuesta por la Ramona Rodriguez contra su marido Antonio Vazquez Amado, de Santa Maria de Cerbo, al que salieron como acreedores el mismo y otros; advertido de que se le oirá y guardará justicia, y pasado dicho término sin presentarse, se seguirá el expediente en su rebeldía, y los autos y diligencias se notificarán en los estrados de este juzgado, parándole el mismo perjuicio que si se hiciesen en su persona. Vivero octubre 4 de 1858.—*Ricardo Rodriguez Rodriguez*.—De su mandato, *Vicente Rio*.

Idem de Santiago.

Don Luis Arias Ulloa, Juez de primera instancia de la ciudad de Santiago y su partido &c.—Por el presente cito, llamo y emplazo a Benita Gaudioso y Botana, de la parroquia de Santa Maria de Conjo, para que dentro del preciso término de treinta días, contados desde la fecha, concurra a este Juzgado y escribanía del infraescrito a oír la notificación de la sentencia de absolución de instancia que se ha dictado en la causa a ella y a otras formada sobre robo de alhajas y dinero en la casa-posada de la Estrella, de este pueblo, a Doña Josefa y Doña Carmen Barreiro de Bayona; advertida de que si no lo realiza, se practicará en estrados y le ostará con la que se hizo a su padre Benito Gaudioso y su curador D. Vicente Rey.

Dado en Santiago a 4 de octubre de 1858.—*Luis Arias Ulloa*.—Por su mandato, *José Curros y Casal*.

Idem de la Puebla de Trives.

Se cita, llama y emplaza a Teodoro Alvarez, vecino del lugar de Mosteiro, parroquia de San Lorenzo de Trives, para que en los siguientes treinta días se presente en esta audiencia y escribanía de Don Pedro Gabriel Rodriguez a prestar declaración indagatoria en la causa formada sobre daños en terrenos de José Rodriguez, de la Pereira; prevenido de que no haciéndolo se le declarará rebelde, parándole perjuicio las diligencias que se

practiquen en los estrados. Puebla de Trives 6 de octubre de 1858.—*Francisco Alonso*.

Idem de Betanzos.

Don Joaquín Maria Feijó, juez de primera instancia en esta ciudad de Betanzos y su partido &c.—Por el presente y término de veinte días a contar desde el siguiente al de su inserción en los Boletines oficiales de las cuatro provincias de Galicia, llamo, cito y emplazo a Manuel Fernandez, hijo natural de Manuela, natural y vecino de San Juan de Lagostelle, juzgado de primera instancia de Villalba, para que se presente en este de mi cargo a ser notificado con la sentencia dada en la causa contra él y otros formada por hurto de leña y lesiones a Juan Barreiro, de la parroquia de Aranga; en la inteligencia que pasado sin verificar su presentación se acordará lo mas que corresponda. Betanzos octubre 8 de 1858.—*Joaquín Maria Feijó*.—Por su mandado, *José Domingo Real*.

Idem de Lalin.

Don Juan Vidal, juez de primera instancia del partido judicial de Lalin &c.—Por el presente cito, llamo y emplazo a Francisco Cabaleiro, vecino de San Miguel de Ponte, en la alcaldía de Silleda, para que dentro de treinta días siguientes se presente en la cárcel de este juzgado y a mi disposición a responder a los cargos que contra él resultan en causa que se sigue sobre maltratos a Angela Criado; apercibido de que de no hacerlo pasado que sea dicho plazo se sustanciará en su rebeldía y le parará el perjuicio consiguiente. Asimismo exorto en la forma de derecho a todas las Autoridades, así civiles como militares, a que se siryan disponer la captura del Cabaleiro y su conducción a mi disposición con la debida seguridad; pues así lo tengo acordado en la causa y en ello se interesa la recta administración de justicia. Lalin y octubre 8 de 1858.—*Juan Vidal*.—Por su mandado, *Manuel Vila*.

Señas de Francisco Cabaleiro.

Estatura 5 pies bien cumplidos, edad 28 años, cara larga, color trigüño, ojos negros, cejas idem, nariz regular, barba poca y negra; viste ordinariamente chaqueta, calzon y polainas de lana del país, color pardo, chaleco de idem blanco, sombrero negro chato de ala larga, camisa y calzoncillo de lienzo del país.

Idem de Ribadavia.

Don Felipe Varela, escribano por S. M. de número del juzgado de primera instancia de Ribadavia.—Certifico: que como tal me hallo autorizando las diligencias de apremio contra D. Alonso Delgado, vecino de esta villa, Administrador que fué de loterías en la misma para hacer el pago de 41,926 rs. y 30 cént. por alcances de dicho ramo, y para dicha ejecución fué nombrado comisionado D. José Alvarez, Administrador de Rentas Estancadas de esta villa. Como el deudor no fuese habido, se le llamó a medio de edictos que se insertaron en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la provincia, sin que a pesar de ello se haya presentado; y por virtud de la presente se le hace el tercero y último llamamiento para que dentro del término de nueve días concurra a satisfacer la expresada cantidad con mas los intereses y costas ocasionadas; apercibido de que no lo verificando se le declarará contumaz y rebelde prosiguiéndose esta ejecución hasta hacer efectivo el reintegro, y las notificaciones que deben hacerse tendrán lugar en los estrados. Y a fin de que tenga efecto la inserción en los expresados periódicos

firmo la presente con el V.º B.º del indicado comisionado en Ribadavia a 9 de octubre de 1858.—*Felipe Varela*—V.º B.º *José Alvarez*.

LA PROBIIDAD.

AGENCIA MUTUA GENERAL DE NEGOCIOS, CASA DE COMISION, CONSIGNACION Y TRÁNSITO, ESTABLECIDA EN MADRID.

Habiendo resuelto el Gobierno de S. M. que el pago de los atrasos del personal del Clero se ejecute en la misma forma que se hace con los empleados civiles; y consiguiente esta Agencia con sus ofrecimientos, tiene el gusto de participar a los interesados que se hallan comprendidos en dicha resolución, que se encarga de poner a nombre de ellos la conformidad en las liquidaciones que se hayan presentado en la Ordenación general de pagos del Ministerio de Gracia y Justicia, activar el despacho de las mismas y recoger los títulos que en equivalencia emite el departamento de emisión de la Deuda, por el medio por ciento de comision, para lo cual los individuos que gusten honrar a la expresada Agencia con su confianza, pueden dirigirse a la titulada de los *Dos Amigos*, calle de la Fuente del Rey, núm. 8.

Orense 14 de octubre de 1858.—*Juan Manuel Araujo*.

IMPORTANTE.

En la Agencia de los *Dos Amigos*, calle de la Fuente del Rey núm. 8, se anticipan cantidades a los Ayuntamientos y mensualidades a todas las clases que perciban sueldo ó pensión del Estado, por un módico interes.

Asimismo se hacen préstamos a otras personas, previas las suficientes garantías ya sean estas en fincas, ya en alhajas ó papel negociable.

Orense 17 de octubre de 1858.—*Juan Manuel Araujo*.

AGENCIA DE NEGOCIOS

DE LOS DOS AMIGOS,

Fuente del Rey núm. 8.—Orense.

Este Establecimiento tiene el honor de anunciar a sus comitentes en particular y al público en general, que desde hoy toma a su cargo el despacho de todos los asuntos referentes a desamortización civil.

Muy pocos desconocen las positivas ventajas que proporciona en el despacho de los negocios una Agencia que cuenta con numerosas relaciones, local próximo a la casa de oficinas y un buen método en sus trabajos y operaciones.

Por lo mismo, se promete desde luego que muchas personas le honrarán con sus encargos y confianza.

Orense 8 de octubre de 1858.—*Juan Manuel Araujo*.

En la casa núm. 5, piso 2.º del camino nuevo se halla establecida una AGENCIA DE NEGOCIOS bajo la dirección de Don Juan Manuel Salgado.

IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.